

LA ALIANZA ENTRE LAS CUATRO ENTIDADES DEL AGRO EN EL MARCO DE LA COMISIÓN DE ENLACE: ¿UN PACTO COYUNTURAL O UN ACUERDO PERMANENTE?

Susana Merlo y Mercedes Muro de Nadal

Introducción

Son suficientemente conocidos los hechos que llevaron a las cuatro entidades más representativas del agro argentino a constituirse como Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias a principios del 2008; fue frente a la decisión del Gobierno nacional de modificar los impuestos de exportación, comúnmente llamados “retenciones”, respecto a algunos cereales y oleaginosas, para imponerlos bajo la modalidad de “porcentajes móviles”, de acuerdo al nivel de los precios internacionales.

Fue el 11 de marzo de 2008, es decir, tres meses después de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia de la Nación con el 45% de los votos, cuando se presentó en la Casa Rosada la Resolución N°125 y, con ello, comenzó un imprevisto conflicto sectorial de proporciones desmesuradas; pero que también llevó a la constitución y consolidación de una alianza entre diferentes entidades agropecuarias, impensable unos

años antes. Esto fue posible por la fuerte heterogeneidad de los actores sociales sobre los que se aplicó la política de retenciones móviles, y también porque constituyó el corolario de una serie de controvertidas medidas que ya habían generado un sinnúmero de reclamos en el sector, especialmente a partir del segundo semestre de 2005, cuando aún restaba un año y medio de la gestión de Néstor Kirchner.

Las cuatro entidades mencionadas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) y Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque de muy diferentes composición, ideología, extracción de sus asociados y objetivos generales, ya tenían el hábito de reunirse con cierta frecuencia para acordar posiciones comunes frente a desafíos serios para el sector. En general, tanto la SRA como CONINAGRO no eran demasiado afectas a adherir a los paros planteados por las otras dos. En el ambiente rural, el grupo era denominado por el nombre de fantasía de “las 4 entidades”, por considerar que eran las más representativas del sector agropecuario, básicamente en la Pampa Húmeda.

En esa ocasión, también se reunieron y la reacción fue inmediata; el primer paro de actividades tuvo lugar los días 12 y 13 de marzo. La protesta escaló rápidamente con cortes de ruta y la aparición mediática de Alfredo De Angeli, un conocido de la Casa Rosada por los cortes ambientalistas en Gualaguaychú. Al inicio de su participación, De Angeli sufrió el rechazo de sus compañeros de FAA, pero contó con el apoyo y estímulo de los ruralistas de CARBAP, el núcleo duro de CRA, que hasta le cedieron uno de los aviones que utilizó mientras duró el conflicto, para recorrer el país. También contó con el apoyo y asesoramiento de integrantes de la SRA, pero especialmente contó con el favor de un nuevo segmento – numeroso – que apareció con este conflicto, y cuyo rol final aún hoy no está bien claro: los autoconvocados.

Hacia fines de marzo, el Presidente de FAA, Eduardo Buzzi, explicó en la Casa de Gobierno la segmentación existente entre pequeños y grandes productores, estableciéndose entonces modificaciones que favorecían a los primeros y trataban de dividir a los afectados. Pero esos cambios no tuvieron el eco esperado entre los productores, ni lograron la división interna en la Comisión de Enlace, y la protesta continuó. El 24 de abril renunciaba el Ministro Martín Lousteau, quien había presentado la polémica medida que, algunos decían que ya estaba contenida en el Plan Agropecuario que el ex titular del INTA y luego Secretario de Agricultura, Carlos Alberto Cheppi, había preparado con profesionales del organismo técnico, antes de asumir.

Así, ante la falta de reacción oficial adecuada, el conflicto siguió escalando. La masividad del acto del agro realizado en la ciudad de Rosario, que coincidió con el Día de la Bandera, y la intransigencia de los ruralistas, llevaron a la Presidenta a girar finalmente la Resolución Ministerial al Congreso de la Nación para que así obtuviera el status de Ley Nacional, aunque ese hecho desencadenó una de las más profundas y demoledoras discusiones sobre política impositiva y el rol de los distintos poderes en la materia, que se recuerde en las últimas décadas.

Tras marchas y contramarchas, y mucha presión pública y mediática, en el Congreso el proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero fue rechazado en la madrugada del 16 de julio en el Senado, por el dramático voto de desempate del Vicepresidente de la Nación.

La Comisión -o “Mesa de Enlace”, como todos la empezaron a llamar- continuó su camino, con mucho menos soporte de la sociedad en general, pero con el desafío de transformarse en una alianza estratégica más allá del problema de la Resolución 125. Nuevos e inesperados conflictos hicieron su aparición: los precios internacionales acusaron el impacto

de la crisis mundial descendiendo notablemente, sin que el Gobierno accediera a bajar las retenciones existentes con anterioridad; los cortes de ruta se suspendieron, pero el sector continuó movilizad y, en varias oportunidades, la unión entre las 4 entidades pareció debilitarse, aunque logró mantenerse, al tiempo que cambiaban algunos de sus miembros. Fernando Gioino, de Coninagro, por Carlos Garetto, y Luciano Miguens de la SRA por su vicepresidente, Hugo Luis Biolcati.

Es el origen de la Mesa de Enlace en el marco del conflicto Gobierno-Agro, sus causas profundas y su desarrollo con posterioridad a la derogación de la polémica Resolución 125 y sus perspectivas, el tema de análisis de este trabajo.

La Mesa de Enlace y su evolución

Calificada por su mentor, el Ministro Martín Lousteau, como “un mal menor”, la Resolución 125 fue el detonante de un conflicto que nadie previó. Tanto la profundidad y la duración del mismo, como las consecuencias institucionales que trajo, asombraron a los mismos protagonistas. Los intentos del Gobierno de provocar una ruptura entre grandes y pequeños productores no dieron el resultado esperado.

Por relato de algunos de los integrantes de la Mesa, los inicios de esta Comisión fueron bastante espontáneos y condicionados por la urgencia de los acontecimientos, y la presión de “las bases”. La posibilidad de mantener la unidad en el futuro no era un tema de debate en los primeros tiempos. Se anunciaban actos y acordaban ir juntos; empezaban a coordinar sus discursos o conferencias de prensa; asistían juntos a los cruces de rutas donde se reunían los ruralistas (aún sin cortes o paros) para escuchar los discursos de la Presidenta de la Nación; se organizaban campamentos, en los que todos esperaban contar con la presencia de la Mesa de Enlace y allí llegaban. Una mínima organización fue necesaria inicialmente para

coordinar la asistencia de representantes de cada entidad a los actos a los que eran invitados. En pocas oportunidades fue la Mesa de Enlace la que organizó un acto, en general eran convocados y la Mesa asistía.

Otras voces especializadas en el tema y no pertenecientes a la Mesa de Enlace creen que la unión de las cuatro entidades fue empujada y forzada por la base ruralista, mucho más dispuesta que ellos a llevar adelante acciones de fuerza. Los autoconvocados en rutas, actos y en reuniones en las sociedades rurales del interior, mayoritariamente pequeños y medianos productores, chacareros, contratistas chicos, arrendadores y arrendatarios y algunos asalariados rurales, pertenecen a las diferentes entidades del agro, o a ninguna. Son en general menores de 40 años, tenían un gran hartazgo de la situación que atravesaban y tuvieron una inmediata reacción frente a la Resolución N° 125.

A su vez, el conflicto tuvo una gran cobertura mediática y, en un gran porcentaje, la opinión pública se identificó con el reclamo del interior del país, canalizando así su bronca en medio de una irritabilidad creciente de la sociedad. El tema del campo se convirtió en el eje de debate diario durante más de tres meses.

A lo largo del tiempo de la movilización y protesta, entre los dirigentes rurales se fue estableciendo también una relación personal y humana que, si bien no está ni estuvo exenta de fuertes choques, significó un componente que en algunas ocasiones favoreció la continuidad de la unión y, en otras, llevó a enfrentamientos serios. Alguno de ellos lo describió como: “prácticamente, vivíamos juntos”. Se reunían varios por entidad a toda hora y empezaron a conocerse y comentar sus problemas. En algunos casos, concluían en que habían llegado con preconceptos. Todos eran conscientes de que nada podían lograr de manera separada.

Pero la mayor exigencia hacia esa armonía la pusieron los ruralistas de las bases, aquéllos que los esperaban en las rutas y en los actos en el

interior, y que gritaban, sin interrupción, “Unidad”. Los obligaron a buscar los caminos para mantenerse unidos, superando o postergando la discusión sobre las diferencias de todo tipo que tenían entre ellos. Ninguna entidad ni dirigente podía atribuirse la lealtad incondicional de los hombres de campo autoconvocados en todo el país, porque no hubiera sido realista hacerlo. Los dirigentes no podían “dar órdenes”, sino tratar de interpretar lo que esperaban de ellos las “bases” y actuar en consecuencia, aún en contra de posturas tradicionales de consenso y alejadas de medidas de fuerza.

En muchos casos, se acercaron a los dirigentes diferentes profesionales, expertos en conciliación, para ofrecer sus servicios; pero no eran de utilidad porque el verdadero problema era interpretar a las bases y sus aspiraciones para no quedar al margen de las decisiones de las mismas. Tanto las declaraciones como los levantamientos de paros agropecuarios, fueron siempre situaciones muy difíciles de manejar frente al sector agrario.

Un respaldo inesperado vino de la mano de los errores de manejo político del Gobierno y sus principales espadas: cada vez que la unión de los dirigentes parecía debilitarse, un nuevo hecho o intento de quebrar el frente agropecuario reforzaba la unión y permitía superar las diferencias nuevamente.

Pasada la noche del desempate en el Senado todos fueron ganados por la euforia, sin advertir que para permanecer debían armar un sólido plan a futuro. No supieron aprovechar la victoria. En cambio el Gobierno reaccionó inmediatamente convocando a infructuosas y cansadoras reuniones técnicas de desgaste, ofreciendo medidas segmentadoras del agro y subsidios de los que se desconfiaba, tornando más difícil la realidad.

El sorpresivo adelanto de las elecciones legislativas de medio término obligó a todos los dirigentes a concentrarse en las candidaturas que los iban

a representar. En cada entidad, sobre todo en las que sus dirigentes tenían y tienen aspiraciones políticas, las estrategias eleccionarias los ganaron y el debate interno se agudizó. No sin asperezas, los Presidentes decidieron abstenerse en esta ocasión de presentar sus propias candidaturas a diputados nacionales. El resultado de las candidaturas en cada entidad obedeció a los intereses personales y posibilidades o aspiraciones políticas futuras de cada dirigente. En la FAA la presencia de A. De Angeli, con su gran capacidad de convocatoria y la imposibilidad de su Presidente, lo llevaron a Buzzi a encargar esa misión a sus dos Vicepresidentes. El temido A. De Angeli, por errores en la negociación con los partidos políticos y falta de experiencia, no llegó finalmente a presentar su candidatura. Llambías envió representantes a competir por las bancas, pero lo hizo en forma más que restringida, mientras que su aparente postulación, finalmente naufragó sin posibilidad de reflote.

La Comisión de Enlace nunca llegó a plantear su institucionalidad como una entidad con personería jurídica, para no perder la individualidad de cada una de las organizaciones. Inicialmente, por las urgencias que los habían reunido y, después, por una decisión consensuada entre los integrantes. Ni siquiera llegaron a diagramar una página web, si bien existe una reserva del sitio, que aparece -en septiembre de 2009- como “en construcción”.

El tema del sostenimiento económico de la Mesa de Enlace apareció de inmediato, de la mano del ofrecimiento de aportes dinerarios desde diferentes sectores empresariales, sindicales, autoconvocados, institutos especializados y productores de muchos rangos. Frente a esta cuestión, la Mesa de Enlace se comportó de manera vergonzante; no expusieron públicamente un tema que es central para la continuidad de la misma, así como para la continuidad de cada una de las instituciones. El Gobierno, perfecto conocedor de los problemas de las entidades para autosostenerse,

contraatacó imponiendo medidas que desfinanciaron a las mismas (eliminación de cartas de porte y sellados, etc.).

La salida, aunque no expuesta públicamente pero conocida por todos, es la constitución de un fideicomiso con un aporte “voluntario” sobre todas las ventas agrarias¹. Por lo menos en teoría, el aporte voluntario cuenta con amplio consenso entre los autoconvocados y productores de diferente pelaje y, se organizaría de forma tal que, la negativa a realizar el aporte, deberá ser explícita². Pero el verdadero centro de la cuestión es cómo se organizará la administración de los fondos recaudados. Cada entidad piensa en secreto en esos fondos como la solución a sus propios problemas de sostenimiento; mientras que las bases autoconvocadas van a sostener en su momento la constitución de un fondo común para investigación y apoyo del sector frente a las políticas que los afectan.

Algunas hipótesis sobre el mantenimiento de la unidad y el futuro de la Mesa de Enlace

Las posiciones discordantes

La primera pregunta que surge es si en el arranque, en el interior de la Mesa de Enlace se llegaron a conciliar las divergentes posiciones ideológicas y sectoriales. No lo hicieron, ni lo intentaron hacer. Simplemente, y con el correr de los días, la presión del sector de autoconvocados, la urgencia del momento y la presión de sus propios afiliados, los decidieron a apoyarse en los temas en los que coincidían, y no en los que los dividían. Esta decisión se mantuvo incluso frente al proyecto de Ley de Arrendamientos: de común acuerdo decidieron no discutirlo en ese momento, sino cuando

1 En agosto de 2009 la Mesa de Enlace lanzó el fideicomiso con el aporte voluntario del 2 por mil de las ventas de granos.

2 Se descontaría automáticamente, salvo expresa negativa del aportante.

fuera indispensable.

En la actualidad y más allá de que la Mesa de Enlace consiga mantenerse unida aún después del fin del mandato de la Presidenta Cristina Kirchner, la posición de las cuatro entidades hoy trata de aparecer firme y todos se expresan públicamente en el mismo sentido, en cuanto a que "... las diferencias con la Sociedad Rural existen, pero hay acuerdos básicos que se respetan. Y se trabaja sobre las coincidencias".³

En otros aspectos, como el de los subsidios ofrecidos a los productores pequeños, la FAA, en una posición no tradicional, expresaba en octubre de 2008: "hubo anuncios de subsidios, pero eso no se tiene que transformar en políticas, no hay nada solucionado".⁴ Esta declaración significa una actualización del discurso de la FAA a las nuevas circunstancias.

La posición mantenida públicamente durante el conflicto por la Resolución N° 125 por el Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, fue particularmente neutral en público, por presión de sus bases de afiliados, que veían con buenos ojos la estrategia de unidad; pero apoyó decidida y económicamente la unidad en privado.

Las diferencias entre las entidades y los cambios de presidentes

A lo largo del conflicto se produjeron dos importantes recambios de Presidentes de las entidades que, por las diferentes personalidades de viejos y nuevos participantes, generaron un desbalance en la Mesa, que la hace no estar todavía estabilizada en el nuevo equilibrio. En la primera etapa, las figuras de Fernando Gioino (Coninagro) y Luciano Miguens (SRA), fueron reemplazadas en este último período (desde fines de 2008)

3 "Nosotros no competimos por la misma novia", Eduardo Buzzi, en *Diario Perfil*, 27 de septiembre de 2009.

4 "Surgen nuevas diferencias en la Mesa de Enlace del campo", en *Infobae*, 14 de Octubre de 2008.

por Carlos Garetto y Hugo Luis Biolcati. Así, la figura habitualmente componedora de Miguens, quedó contrapuesta por el carácter mucho más duro y con poca experiencia política inicial de Biolcati. Mientras que la llegada de Garetto, radical de larga trayectoria en la participación y gestión política, llevó a una segunda etapa donde hay varias figuras fuertes y con aspiraciones políticas.

La misma génesis de cada entidad marca diferencias profundas: la FAA tiene orígenes de política partidaria, con vertiente en movimientos populares y cuenta con liderazgos naturales. La SRA, con una composición interna de sus asociados de varios partidos políticos, no es una institución política, y casi ni siquiera gremial; pero en el imaginario colectivo quedó con la identificación sectorial del agro argentino, aunque sólo lo sea en sentido aparente. Quizás por ser la primera organización agraria del país, se ha convertido en un símbolo, con mucho más peso desde el inicio del conflicto en 2008. Ni siquiera la inmensa movilización económica que significan las grandes ferias agropecuarias de los últimos años: Feriagro, Expochacra o Expoagro, organizadas por grupos independientes, han logrado quitarle la posición.

Por su parte, CRA es una asociación marcadamente gremial, competitiva y heterogénea políticamente, mientras que CONINAGRO está compuesta, en general, por grandes cooperativas y no cuenta con productores (directos) entre sus asociados.

Las transformaciones en el sector agrario

Otra gran pregunta es si las transformaciones del campo argentino de los últimos 20 años explican la alianza de la Mesa de Enlace frente al conflicto agrario de 2008/9.

En la opinión de algunos autores, el Gobierno con su política hacia el agro subestimó las transformaciones producidas por el auge de la soja

en las entidades agrarias, acercando los intereses de pequeños, medianos y grandes productores, por lo menos en defensa de la rentabilidad y la oposición al sistema de retenciones móviles.⁵

Si analizamos históricamente a la FAA y la SRA, los desafíos actuales son distintos a los de sus orígenes; se modificó el perfil de los asociados y las circunstancias económicas que llevaron a la creación y evolución de ambas instituciones y, por tanto, las diferencias entre ellos, en algún sentido, no son ya tan pronunciadas.

La Resolución N°125, sin medidas complementarias, afectaba muy directamente reduciendo la rentabilidad de una gran cantidad de pequeños y medianos *pools* de siembra en los pueblos rurales, compuestos por inversores de los mismos pueblos, que en los últimos años se habían expandido mucho y, en cierta medida, fueron muchos de estos financistas extra sector quienes impulsaron a sus dirigentes a mantenerse unidos.

Los cambios tecnológicos, las nuevas formas de producción, la dura realidad de una economía de escala que expulsó del campo a muchos de los pequeños propietarios y los llevó a arrendar sus tierras y a verse fuertemente afectados por la Resolución 125, porque tenían sus arrendamientos pactados en el precio de la soja.

La rápida legitimidad/popularidad y ascendente logrado por la figura de Alfredo De Angeli, más allá de poseer una personalidad con la que se sintieron identificados muchos productores, arrendatarios, contratistas y trabajadores asalariados, se puede explicar por la existencia de un actor socio-económico distinto, extendido actualmente en toda el área pampeana.

5 Domínguez, N y Orsini, G., “El conflicto Rural, su relación con el modelo hegemónico vigente y la estructura agraria vigente”, en VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 11 al 13 de noviembre de 2009.

El peso de la unidad

En medio de una sociedad fuertemente marcada por los antagonismos ancestrales y actuales, los hombres de campo comenzaron a experimentar las ventajas de una integración parcial y quieren, en su mayoría, continuar en ella, exigiendo a sus dirigentes que estén a la altura de sus expectativas. Hasta el natural recelo entre los dirigentes de la FAA, especialmente entre Buzzi y De Angeli, es analizado negativamente por muchos productores.⁶

Por su parte, los sectores denominados “autoconvocados” plantearon un nuevo desafío, que era superar, frente a la coyuntura, las diferencias filosóficas, ideológicas y políticas existentes entre ellos.

Evolución del conflicto Gobierno-Agro a lo largo de 2009

Hacia fines de 2009, ya no hay discusión sobre el punto de inflexión que significó la presentación, por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de las retenciones móviles para el campo, el 11 de marzo de 2008. El “11M”, como se denomina a esta fecha, tiene un antes y un después, y no sólo en la relación oficial del Gobierno con el campo, sino también con el resto de la ciudadanía, y hasta con las demás fuerzas políticas.

De hecho, es analizado como la primera oportunidad en la que el ex presidente Néstor Kirchner no pudo imponer su voluntad y debió desandar el camino. Otros ven en esta ocasión el principio del debilitamiento de la etapa administrativa de ambos consortes, y no son pocos los que creen que constituyó la génesis de la derrota electoral del 28 de junio del año siguiente.

Sin embargo, no era la primera vez que se planteaban retenciones

6 “Los gauchos en los pueblos me dicen ‘No te pelees más con de Angeli’”. Eduardo Buzzi. *Diario Perfil*. 27 de Septiembre de 2009.

móviles para el agro en el país y que, por otra parte, también se aplican al sector de combustibles, aunque la naturaleza de este rubro es totalmente distinta debido a la gran concentración que existe. Básicamente, se trata de un negocio en media docena de manos, mayoritariamente, multinacionales, mientras que en el campo, alrededor del 85% son productores pymes, y solo un 10% se pueden considerar “grandes”, mientras que apenas un 1% es de capitales internacionales puros.

Quando presentó la medida, el Gobierno no esperó una reacción de rechazo tan contundente, ni la casi inmediata adhesión que la causa del interior fue logrando en los sectores urbanos. Probablemente no se tuvo en cuenta que, justamente, a diferencia de lo ocurrido con los combustibles, los que se sintieron afectados en este caso no eran grandes empresas, mayormente internacionales, sino miles de pequeñas empresas, muchas familiares, casi todas pymes rurales, a las que el Gobierno manifestaba defender.

Otro elemento que, tal vez, no fue tenido en cuenta en sus inicios, fue que el conflicto del campo, casi el único de envergadura hasta aquel momento, determinó que buena parte de la ciudadanía “utilizara” esta situación para canalizar sus propias protestas, malhumor e inseguridades, encolumnándose tras el campo, aunque en muchos casos, no existiera ninguna “adhesión” real al problema del interior, sino la comunión en el espíritu de protesta contra el Gobierno y su manera de crear y administrar los conflictos.

El Ejecutivo tomó nota de lo ocurrido y, en los meses siguientes al “voto no positivo”, que le impidió imponer la medida, retomó la iniciativa política mediante la apertura de varios frentes⁷, presentando una serie

7 Los más destacados fueron: el incremento de tarifas de servicios públicos, la estatización de los fondos jubilatorios, la televisación gratuita del fútbol y la ley de medios de comunicación.

de leyes y decretos que le permitieron atomizar el interés de la sociedad, impidiendo así que un solo tema o sector captara la atención, la voluntad y el respaldo o rechazo de una ciudadanía siempre veleidosa y cambiante. De hecho, el campo no logró volver a organizar un nuevo acto de la envergadura de las alcanzadas en Rosario (25 de Mayo) y en Buenos Aires (Rosedal 17 de junio) en el año 2008.

Pero no fue ese el único cambio que se experimentó a partir del conflicto. Así, desde ambos sectores enfrentados (interior vs Gobierno), se optó por suavizar el conflicto evitando actos de provocación e intimidación de la sociedad, como los cortes de rutas, por un lado, y la aparición irritante en los lugares de reclamo del movimiento piquetero de Luis D'Elía, o gente enviada por el sindicalista Hugo Moyano, como había ocurrido en Ceibas en 2008, desde el sector afín al Gobierno.

Y si se suprimieron los elementos ríspidos y de choque, fue porque generaban en la ciudadanía la inmediata simpatía hacia el sector opositor, y sobre todo, porque se dimensionó el alto costo político que pagó el Gobierno, que en cuatro meses debió reemplazar no solo al Ministro de Economía, Martín Loustean, sino también al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al Secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, por la misma razón.

Pero, lo que para muchos fue un “triumfo” del agro, al evitarse finalmente la sanción de la Resolución 125, en realidad, fue apenas evitar la profundización de las exacciones oficiales, ya que ninguno de los problemas que el campo venía reclamando hasta ese momento encontró solución a partir de allí.

Un tema importante de análisis es el de cuáles fueron las razones por las que no se avanzó en las soluciones reclamadas, después de la etapa crítica del conflicto y de la crisis política desencadenada. Quizás se haya debido a la inmediata disminución de la presión de contralor que

los productores venían ejerciendo sobre el Poder Legislativo, al punto que, desde entonces, prácticamente no fue votada ninguna otra ley que no fuera enviada por el Ejecutivo e, incluso éstas, no tuvieron cambios respecto a cómo habían sido enviadas al Congreso por la Presidencia.

Es probable que la falta de experiencia de los dirigentes agropecuarios y la carencia de antecedentes en el país de un Gobierno tan resistente a mudar de posición, ignorando lo manifestado en las urnas y en acciones directas de la ciudadanía, haya determinado esa poca reacción durante varios meses que, por un lado, permitió la recomposición del Gobierno (que actuó, nuevamente, con gran celeridad), y también la recuperación de su iniciativa política, manifestada en el adelanto en cuatro meses la fecha de las elecciones legislativas de medio término, mientras que desde el interior no surgieron contrapropuestas.

A lo largo del año y medio posterior al “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cleto Cobos, multitud de importantes acontecimientos tuvieron lugar afectando nuevamente al sector y al Gobierno en una u otra dirección. Surgió una crisis financiera internacional de grandes dimensiones (similar a la recesión del ‘30); se agudizó y prolongó la fuerte sequía que se había iniciado a fines de 2007 en diferentes zonas del país; se produjo el recambio del titular de la Secretaría de Agricultura; se modificó el Organigrama oficial con la creación de la Secretaría de Integración Nacional bajo la dependencia de Jefatura de Gabinete y se puso al frente de la nueva cartera a la dirigente ruralista del grupo Pampa Sur, María del Carmen Alarcón y, finalmente, pocas semanas después, se devolvió el rango de Ministerio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Muchos creyeron ver en esta última medida el resultado de los reclamos del campo. De hecho, la rejerarquización del área estaba entre los 20 puntos esenciales solicitados por el sector. Sin embargo, tanto la forma

en que fueron adoptadas estas decisiones, como los nuevos funcionarios puestos a cargo, llevaron a muchos a pensar que se trató solo de estrategias de distracción, ya que los nuevos funcionarios son de extracción política partidaria con escasa o nula formación técnica, muy poca independencia operativa, y tampoco cuentan con el fortalecimiento de los fondos que requeriría una verdadera cartera armada para cumplir con una estrategia país.

Por otro lado, tampoco fueron corregidas ninguna de las restricciones que generaron el reclamo original (prohibiciones, cupos, precios de referencia, permisos de exportación, etc.) que permitieran pensar en una liberación productiva del campo, ni se acotó la función de los funcionarios más urticantes, como el Secretario de Comercio Guillermo Moreno, o de Ricardo Echegaray, que de titular de la ONCCA pasó a la AFIP, poco antes de que estallara el escándalo por las irregularidades en las asignaciones de subsidios de este organismo. Mucho menos, se implementaron cambios en la política interna de precios de los alimentos, ni el desequilibrio entre eslabones y/o sectores (exportadores, polleros, etc.).

Así, tanto la política interna de las organizaciones del campo, como la del país con sus elecciones adelantadas, casi impusieron un ritmo mucho más calmo a los reclamos del sector, que se encontró sin espacio para las demandas. Pero también jugó aquí la legítima especulación política partidaria con la que manejaron algunos dirigentes las ofertas hechas por diferentes agrupaciones políticas. En este sentido, fue la FAA quien más legisladores nacionales obtuvo, si bien todas las entidades cuentan con legisladores propios luego del recambio legislativo. Y, si no se pudo capitalizar más aún la tendencia, fue porque las apetencias personales y los celos de algunos dirigentes, impidieron colocar un mayor número de representantes del campo en las bancas parlamentarias.

Pero incluso, este mismo hecho generó controversias ya que, para

algunos, la existencia de “agrodiputados”, implica una visión corporativa que puede debilitar la posición legislativa del sector, y sostienen que es mucho más importante hacer un trabajo de difusión global sobre todos los legisladores y, más aún, sobre el conjunto de la sociedad, que todavía está pendiente o que constituye un profundo déficit en el que confluyen responsabilidades, incluso del propio Gobierno.

De todos modos, el cambio ya se había producido. Uno de los efectos más profundos del “M11” fue, justamente, la vuelta cívica que se había impuesto a una parte importante de la sociedad, aunque todavía no se haya logrado el equilibrio total en la tendencia, o las especulaciones personales aún se impongan por sobre el interés colectivo o sectorial.

Existe también una diferencia conceptual importante entre los representantes de cada una de las entidades que, al igual que en la relación de las organizaciones entre sí, no siempre es homogénea, y que seguramente quedará al desnudo en el tratamiento de algunos proyectos de ley.

El futuro de la Mesa de Enlace

Pese a una evidente debilidad de esta Mesa de Enlace en relación con la existente en la primera etapa del conflicto, la continuidad de la unión no parece correr peligro hasta la finalización del actual período de gobierno. Sin embargo, es innegable que hoy el hilo que las une es muy débil, entre otras cosas, porque falta un proyecto conjunto superador de mediano y largo plazo que permita zanjar las diferencias. Es claro que en forma individual no tienen chance alguna de actuar sobre las políticas agrarias.

Hasta ahora, los autoconvocados, los que no tienen participación activa en ninguna de las cuatro entidades, o los que en este conflicto prefirieron tener una actitud más independiente de las gremiales, habían

constituido el elemento cohesionante que forzó la unidad y obligó a superar los individualismos durante más de un año y medio, pero eso puede llegar a cambiar si por ejemplo, algunos de los dirigentes nacionales insisten con una postura más personal que sectorial.

Otro hecho que podría debilitar la ya frágil sociedad, es que los autoconvocados se decidieran finalmente a adoptar alguna forma de asociación más sistemática y eligieran a algún líder de nivel nacional para representarlos, tal podría ser el caso de Alfredo De Angeli, un tanto marginado últimamente del nivel público de su entidad, la FAA.

En esta hipótesis, la nueva organización podría pasar casi a competir con la Mesa de Enlace y, si bien no contaría con los recursos económicos que promete brindar el fideicomiso proveniente de las operaciones con granos, con que se fundeará la Mesa de Enlace y/o cada una de las entidades que la componen, es probable que cuente con un mucho mayor respaldo desde el interior que hoy siente que nuevamente es poco escuchado y representado por las organizaciones nacionales más tradicionales.

El centro del desafío de la Mesa de Enlace es lograr articular un plan a futuro, y conseguir coordinar una franja de actividades en común. Actualmente están tratando de dar forma a un instituto técnico de investigación y comunicación.

El manejo conjunto de todos o parte de los fondos recaudados es muy difícil, pero es una exigencia clara de las bases sectoriales. Por otra parte, la evidente tentación de cada entidad es la de encontrar la solución a sus eternas penurias financieras con esos fondos.

El mantenimiento de la individualidad de cada entidad no está en discusión debido a las características particulares de cada una, por las aspiraciones políticas personales de sus dirigentes y por el mismo carácter mediático de algunos de ellos.

Por eso, el desafío está planteado y es difícil de alcanzar.

Además, las aspiraciones a cargos electivos o legislativos de la mayoría de los dirigentes gremiales no es ningún secreto. Es más, casi es parte estructural del hecho de ser dirigente. De ahí que otro escollo que enfrenta la Mesa de Enlace para garantizar su continuidad se centre en encontrar objetivos comunes, que trasciendan los intereses de los hombres que conducen cada una de las organizaciones. Eso debería ocurrir en esta etapa de gobierno, ya que fue justamente la política de la Administración Kirchner la que forzó la reunión de entidades que habían actuado en forma bastante individual en las últimas décadas. No sería raro, entonces, que cuando se produzca un cambio de Gobierno, de estilo y de contenido, la “sociedad sectorial” se diluya, si antes no alcanza al menos, el mínimo de estos objetivos.

Tanto es así que algunos destacan que, si bien la creación del fideicomiso con fondos del propio sector, que apunta a financiar la acción gremial de la Mesa de Enlace es, sin duda, un elemento de unidad también a futuro, otros señalan que, sin embargo, en ningún lugar figura que las acciones que se encaren con esos fondos van a ser conjuntas y, más vale, la administración cuatripartita que se organizó (en realidad, quintupartita ya que también la integra el centro de Acopiadores, encargado de la percepción primaria de esos fondos) apunta, más bien, a garantizar que la “repartición” de esos fondos sea equitativa entre ellos. Por ahora no hay aún objetivos conjuntos, sólo fondeo conjunto.

Tal vez esta carencia se deba al escaso tiempo transcurrido desde la creación, y a la falta de experiencia en el trabajo grupal que obliga a postergar las apetencias personales e, incluso, la casi absoluta dependencia de los flashes y de la ubicación “en cartel” que ostentan los titulares de varias de las entidades. Sin embargo, en esta etapa parece que eso sólo podrá ser superado ante la existencia de un adversario común, y/o por la amenaza de alguna agrupación competidora, que se sume a la presión de

las bases, y que los obligue a mantener la unidad.

Muchas cosas faltan por hacer, entre ellas la conformación de una táctica y una estrategia para seguir, con definición tanto de objetivos coyunturales como estructurales, y la profesionalización de la acción gremial con especialistas en distintas disciplinas que casi no existieron en la etapa que pasó. Las entidades del campo se movieron en forma bastante “voluntarista” y con arranques entre mediáticos y oportunistas, algunas veces efectivos, pero sin ninguna continuidad de ideas-fuerza.

Con posterioridad a las elecciones de 2011 es probable, entonces, que no logren mantenerse unidas si antes no llegan a articular un proyecto estructural de mínima que exceda los personalismos y a las propias organizaciones en forma individual, y plantee objetivos sectoriales concretos de mediano y largo plazo que, en buena medida, deberán pasar por el ámbito legislativo.

